



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

Expte nº: 22835/2021 AML

Autos: “BARBERO, FRANCISCO PABLO c/ ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia Definitiva del Expte. Nº 22835/2021

Buenos Aires,

I.- Surge de autos que la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la Resolución 2021-1908-E-AFIP-DDEIMPR#SDGTLSS, no hace lugar a la presentación interpuesta por el contribuyente BARBERO FRANCISCO PABLO, contra los términos de la Resolución Administrativa Nº 723/17 (DV TJSN), todo ello de acuerdo a lo expuesto en el dictamen que antecede.

II- Así las cosas, el recurrente interpone recurso de apelación remitiéndose las actuaciones a este Tribunal, informando que el apelante no acreditó el depósito de deuda resultante tal como lo exige el art 15 de la ley 18.820.

Conforme surge del escrito recursivo, el apelante solicita se declare la inconstitucionalidad del requisito de admisibilidad exigido por el art. 15 de la ley 18820. A su vez, solicita su eximición ya que considera que efectuar el pago implicaría comprometer el curso normal de las obligaciones regulares del apelante, lo que conllevaría a violar la garantía del derecho de defensa

III. Tal como han sido elevados estos actuados corresponde, en primer lugar, analizar la procedencia formal del recurso interpuesto.

En tal sentido cabe destacar que el art.15 de la ley 18.820 (modificado por ley 23.473) expresamente dispone que "...deberá depositarse el importe de la deuda resultante de la resolución administrativa; su omisión producirá la deserción del recurso", en tanto que el art. 39 bis del decreto-ley 1285/58 (según art. 26 de la ley 24.463) establece que la Cámara Federal de la Seguridad Social conocerá en los recursos interpuestos contra resoluciones que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos que denieguen total o parcialmente impugnaciones de deuda determinadas por el citado organismo en ejercicio de las funciones asignadas por el decreto 507/93, “siempre que en el plazo de su interposición se hubiere depositado el importe resultante de la resolución impugnada”.

Con relación a las disposiciones de diferentes leyes que supeditan la concesión del recurso a que previamente se pague el importe pertinente, reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene declarado que no resultan violatorias del art. 18 de la Constitución Nacional, si no se ha alegado y probado que aquella



reviste desproporcionada magnitud con relación a la concreta capacidad económica del recurrente.

Idéntico criterio es el que prevalece en materia tributaria pues ha admitido la validez constitucional de la exigencia de pago previo de los tributos y recargos pertinentes, como requisito de la intervención judicial, con la salvedad de supuestos de monto excepcional y de falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación, doctrina que ha sido extendida para interpretar los arts. 15, segunda parte, de la ley 18.820 (ver Fallos 215:225 y 501 ; 219:668; 247:181; 250:208; 256:101; 285:302; 287:101; 295:62 y 240; 296:40 y 57; 307:1753).

Ahora bien, este tribunal ha sostenido sistemáticamente que la falta de depósito previo produce la deserción del recurso por imperio de lo dispuesto por el art. 15 de la ley 18.820 y que dicha disposición legal no se ha visto afectada por la reforma constitucional de 1994 y la incorporación efectuada en la misma de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es por ello que correspondería sin más, así resolverlo.

Sin perjuicio de ello, si bien en el caso de autos la imposibilidad económica argumentada no se encuentra debidamente acreditada, la probable falta de ponderación de ciertas circunstancias por parte del organismo fiscal, tornan aconsejable la apertura de la instancia judicial encuadrando la cuestión dentro de la hipótesis de excepción de creación pretoriana del Alto Tribunal, a la que hizo referencia en último término, por cuanto la exigencia de circunstancias formales acarrearían la frustración del valor justicia y el menoscabo del derecho de defensa en juicio (v. CSJN- S. 549 XXXIX RH “San José S.A. del 12/12/06” fundamentos del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que remite al fallo).

Por lo expuesto, en el caso particular de autos, se considerará procedente la apertura de la instancia pues lo contrario podría consentir que circunstancias formales conduzcan a la frustración del valor justicia.

La cuestión debatida ha sido motivo de pronunciamiento por esta Sala en autos “Johnson Acero S.A. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ impugnación de deuda”, Sent. def. n° 90.594 del 7/2/01” y “Dr S. A. s/ impugnación de deuda”, sentencia interlocutoria N° 57654 del 24/02/04.

IV.- Así delimitada la incidencia, el recurrente expresa agravios manifestando que los períodos reclamados 8/2009 y 11/2010 se encuentran prescriptos, ya que considera que AFIP no llevó a cabo el procedimiento de determinación por lo que correspondería tener por operada la prescripción. Sostiene que DENBAU S.A. no se defendió y dejó firme la deuda invocada por la AFIP, considerando que no puede serle extendida la responsabilidad al Sr. Barbero, si éste no fue parte del procedimiento administrativo de la citada empresa, toda vez que no se ha respetado su derecho de defensa. Agrega que no se analizaron ni recabaron elementos probatorios respecto a la obra supuestamente realizada por Denbau S.A. Entiende que aplicar una resolución





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

que fue dictada en actuaciones ajenas al Sr. Barbero, endilgándole responsabilidad solidaria por los períodos ya señalados debe ser revocada, dada su ilegitimidad y arbitrariedad. Por todo lo antedicho solicita la nulidad de la resolución dictada por el organismo fiscal.

V.- Sentado ello, de manera previa, corresponde resolver desde qué fecha corresponde declarar prescriptos o no los períodos reclamados en autos.

Ello así, la prescripción liberatoria es, concreta y sintéticamente, la extinción de las acciones derivadas de un derecho por su abandono por el titular durante el término fijado por la ley. El art. 16 de la ley 14.236 dispone en su primer párrafo que “Las acciones por cobro de contribuciones, aportes, multas y demás obligaciones emergentes de las leyes de previsión social prescribirán a los 10 años”, por lo que es dable destacar que con la prescripción lo que se da por extinguido es la acción con que se cuenta para reclamar un derecho.

También, corresponde señalar que la aplicación del artículo 2532 del Código Civil y Comercial al caso de autos no resulta procedente toda vez que el procedimiento por deudas perseguidas en concepto de aportes y contribuciones por parte de AFIP posee una legislación específica –16 ley 14.236-.

A mayor abundamiento, el organismo fiscal tiene amplias facultades de verificación, control y formulación de cargos (art. 35 de la ley 11.683 y cctes).

Por consiguiente, no cabe admitir la prescripción liberatoria en los términos del art. 16 de la ley 14.236, respecto de los créditos devengados con anterioridad a los 10 años previos al reclamo del rubrado, esto es 15/07/2014 (fecha de notificación de las Actas de Inspección e Infracción), dado que no ha transcurrido el plazo aludido, motivo por el cual no se encuentra prescripta la deuda perseguida en autos.

VI) Previo a resolver la cuestión de fondo, corresponde señalar que con relación al planteo que las actas recurridas carecen de los requisitos propios del acto administrativo, es dable destacar que conforme Juan Gilibert, en “ El Derecho a la legítima defensa en el sistema jubilatorio argentino” (L.T, pág. 385/6), las diligencias que se cumplen con la intervención de los funcionarios competentes y se instrumentan a través de las actas de verificación, que se notifican al interpelado, no reúnen los requisitos esenciales ni generales de un acto administrativo y ello por cuanto no ha mediado una decisión fundada que cause estado, pues hasta tanto no se haya agotado el procedimiento regulado por la ley 18.820 y que da lugar a la ejecución, no es un acto administrativo definitivo, contando el obligado con los medios legales apropiados para demostrar la improcedencia del débito intimado.

Es sólo la conformidad del contribuyente, mediante la no impugnación de las actas, lo que permite al fisco proceder a su cobro, y si, por el contrario, se muestra disconforme con la deuda o infracción, la ley 18.820 pone a su alcance el



procedimiento recursivo adecuado para fundamentar sus agravios. Sólo después de una decisión fundada, acto administrativo definitivo, contraria a la pretensión del recurrente, se habilitará a la ejecución fiscal, siempre y cuando no medie apelación ante la Excma. Cámara Federal de Seguridad Social, pues entonces deberá esperarse una sentencia favorable de ésta a los intereses fiscales.

Como consecuencia lógica de lo expuesto, cabe concluir que las actas de inspección e infracción no son más que una constatación que hace la Administración de la situación del contribuyente, por lo que no cabe exigir de las mismas los requisitos propios de los actos administrativos, como tampoco que sean realizadas por juez administrativo, ya que por tratarse de constataciones las mismas pueden ser cuestionadas- tanto la deuda como la multa- y dar nacimiento posteriormente al proceso que nos ocupa. Por todo lo expuesto, corresponde la desestimación del agravio esgrimido por el apelante en este sentido.

VII) La deuda intimada tiene su origen en cruces informáticos mediante los cuales se habría comprobado que DENBAU S.A, presentaba un alto porcentaje de empleados con una remuneración inferior al salario mínimo vital y móvil.

Además se procedió a comparar la cantidad de mano de obra declarada por la rubrada, con los necesarios para realizar las obras informadas a la SRT, y habrían observado que declaraba menos que los estimados a partir del índice mínimo de trabajadores –IMT- de la actividad.

Así, notificada la deuda a DENBAU S.A y ante su incumplimiento, se notifica la deuda al presidente de la sociedad en su carácter de responsable solidario -Sr. Francisco Pablo Barbero-, en los términos del art. 8 de la ley 11.683.

Cabe señalar que, la presente causa se analizará bajo el amparo del decreto 2102/93, que remite al art. 8 de la ley 11.683. Ello sin desconocer que la ley 27.430 (BO 29/12/2017), ha modificado los arts 6 y 8 de la citada norma, ya que la misma ha entrado en vigencia al día siguiente de su publicación, de manera posterior al vencimiento de los períodos intimados, como así también a la notificación de las actas que dieran origen a la deuda que aquí se discute, por lo que corresponde analizar la presente causa de acuerdo a los preceptos de la primera norma citada.

Sentado ello, el art. 6 de la ley 11.683 en su inc. d) dispone que están obligados a pagar el tributo al Fisco, con los recursos que administran, perciben o disponen, como el responsable del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios. Por su parte el art. 8 de la precitada ley establece que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere con otros responsables del mismo gravamen, todos los responsables enumerados en los primeros 5 incisos del art. 6º, cuando por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1
del plazo fijado, quedando excluidos de dicha responsabilidad quienes demuestren debidamente al AFIP que sus representados los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.

Así planteadas las cosas, el punto central del caso se vincula entonces con la eximición de la responsabilidad solidaria de quien ostentaba el cargo de socio gerente (cfr. Art. 8 inc. a in fine de la ley 11.683). La probable responsabilidad que se le endilgue al socio gerente no está dada por revestir la calidad de tal, sino por la posibilidad que su actuación esté condicionada a hechos u omisiones suyas, debiendo demostrar que la empresa lo haya puesto en imposibilidad de cumplimiento. En este sentido, jurisprudencialmente se ha sostenido que “ La responsabilidad ilimitada y solidaria que establece el art. 8 de la ley 11.683 no ha de aplicarse a las personas que demuestren fehacientemente la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales por causas ajenas, es decir, que no fue su voluntad o actuar negligente el que soslayó -deliberadamente- el debido cumplimiento fiscal. Así lo entendió el Tribunal al sostener que el art. 8 de la ley 11.683 deriva en la responsabilidad solidaria del Director o Presidente de una sociedad anónima "cuando se demostrase que el mismo, pudiendo realizar los aportes previsionales y cumplir con las cargas fiscales, no lo hizo, dando lugar al nacimiento de una responsabilidad de tipo subjetivo” (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 08.05.06, "Peña, Emilio").

Esta situación fáctica está ausente en los presentes actuados, ya que el recurrente no efectúa ninguna consideración al respecto.

De esta manera, el recurrente no logra desvirtuar los fundamentos con que se dictó la resolución que recurre, ni arrima prueba que avale sus argumentaciones, limitándose a reiterar las argumentaciones vertidas en cada uno de los recursos interpuestos en sede administrativa.

En concordancia, las causales de “exculpación” referidas en el art. 8 de la ley 11.683, no se encuentran arimadas a la causa, ya que el apelante no logra demostrar que la sociedad lo haya colocado en la imposibilidad de cumplir con los deberes previsionales, efectuando justificaciones dogmáticas que no logran conmover los fundamentos de la resolución recurrida.

En virtud de todo lo expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida ya que el reclamante no ha acreditado la existencia de causas eximentes de la responsabilidad que se le atribuye.

VIII) En atención a que la AFIP no es equiparable con las partes en las contiendas judiciales comunes, sino que actúa oportunamente en defensa del interés general, las costas se imponen en el orden causado (cfr. art. 68 del CPCCN).

La Dra. Victoria Pérez Tognola no vota en virtud de haber sido aceptada su excusación (art. 109 RJN).



Por ello, este TRIBUNAL RESUELVE: 1) Declarar formalmente admisible el recurso; 2) Confirmar la resolución recurrida de acuerdo a las fundamentaciones expuestas precedentemente; 3) Costas por su orden.

Regístrese, notifíquese y remítase

